

Proyecto de informe provisional del Grupo de Trabajo Sindical para una El futuro de la energía pública

Índice de contenidos

** Tenga en cuenta que esta versión sólo incluye las introducciones de cada sección.*

*El documento completo está todavía en curso. **

Introducción

1. Primera parte: El reto climático, la descarbonización y la necesidad de un cambio de política global

- 1.1. Descarbonización: Afrontar la realidad
- 1.2. Los objetivos climáticos no se cumplen
- 1.3. El sector eléctrico: Las energías renovables no sustituyen a los combustibles fósiles
- 1.4. El déficit de inversión crece
- 1.5. No existe un precio efectivo del carbono
- 1.6. Subvenciones públicas al servicio del beneficio privado
- 1.7. La reducción de las subvenciones disminuye la inversión
- 1.8. El reino del caos: Desafíos técnicos y necesidad de planificación
- 1.9. Los límites de la generación distribuida [GD] y el "prosumismo"
- 1.10. No resuelto: Dificultades técnicas creadas por la energía renovable variable (ERV)

2. Segunda parte: Los bienes público-comunes mundiales y el papel crucial de la energía pública

- 2.1. La transición energética: Un enfoque de bienes públicos y comunes globales
- 2.2. Financiación de un futuro energético público: Cuestiones y opciones
- 2.3. Restaurar la planificación: Desprivatizar, desmercantilizar y "descomodificar" los sistemas de energía
- 2.4. Cumplir la promesa de buenos empleos y una transición justa (TBC)

3. Tercera parte: "Electrificar todo" abordando los desafíos técnicos

- 3.1. Necesidades futuras
- 3.2. Generación de electricidad

- 3.3. Redes de transporte
- 3.4. Sistemas y mercados eléctricos
- 3.5. Investigación y desarrollo
- 3.6. Impacto de los recursos
- 3.7. Cómo puede afectar la propiedad pública al sector

4. Cuarta parte: La promesa de un futuro energético público

- 4.1. Pensar a largo plazo: Abogando por un enfoque planificado de la transición energética:
- 4.2. Establecer un enfoque permanente para los debates sindicales
- 4.3. Hablar con una sola voz, y utilizar un lenguaje común, cuando se interviene en la escena internacional

Apéndice: Apoyo sindical a un futuro energético público

Introducción

Este informe es un trabajo en curso que continuará hasta la COP26. Su objetivo es estimular el debate entre los sindicatos y sus aliados sobre el papel crucial de la propiedad pública de la energía para impulsar una descarbonización de toda la economía que sea coherente con los objetivos basados en la ciencia.

El informe tiene un alcance global. El actual enfoque global de la descarbonización, que está impregnado de ideas y supuestos neoliberales, se enfrenta a una grave crisis. Los trabajadores y los consumidores no se han beneficiado de este enfoque, y la promesa de millones de nuevos "empleos verdes" no se ha cumplido hasta ahora.

Este informe explica la actual crisis de la política climática y energética neoliberal, y ofrece una evaluación de la situación actual. En contra de los titulares optimistas y de gran parte de la percepción pública, la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono *no se está produciendo*, y el proceso de descarbonización no ha comenzado realmente. A nivel mundial, lo que estamos viendo no es una *transición* energética, sino una *expansión* energética, en la que el uso de combustibles fósiles, y por tanto las emisiones, siguen aumentando.

Impulsado por las subvenciones públicas, el sector de las energías renovables está creciendo, pero su crecimiento ha sido incremental, y el sector se enfrenta a graves problemas económicos y a formidables obstáculos técnicos. El crecimiento de las energías renovables tampoco ha sido capaz de crear las condiciones para una transición a la industria, el transporte y otros sectores clave con bajas emisiones de carbono. En el transporte, predominan las "asociaciones público-privadas", incluso en los esfuerzos de descarbonización, pero este enfoque no está impidiendo las emisiones relacionadas con el transporte que, hasta el COVID, estaban aumentando en todas las partes del mundo. En la edificación y la construcción, no existe una estrategia amplia -y mucho menos global- para la conservación de la energía a gran escala.

Con demasiada frecuencia, los debates sobre las opciones tecnológicas están dominados por los intereses creados y los grupos de presión, y las decisiones se toman en función de las necesidades de las empresas privadas y los inversores, en lugar de las de los ciudadanos, con los consiguientes cambios en las políticas y normativas para satisfacer sus demandas, incluso cuando esto conlleva la erosión de las condiciones laborales y el despido de trabajadores.

Este informe explica cómo un enfoque de bienes públicos globales ofrece una alternativa basada en la propiedad y el control públicos desde una perspectiva internacionalista, y cómo los sistemas públicos de energía pueden proporcionar una plataforma para cooperar y compartir las mejores prácticas, al tiempo que se ponen en común los recursos para optimizar la investigación posterior. Además de ser menos costosa, la energía pública abre la puerta a transferencias de usos basadas en los requisitos técnicos y las prioridades sociales más que en los beneficios, y hacia una optimización más amplia de los sistemas de transporte público, programas masivos de eficiencia y rendimiento energético en los

edificios, y un medio para desarrollar y guiar el desarrollo de las tecnologías más adecuadas para avanzar en la descarbonización de las industrias.

En cuanto a las tecnologías de producción, el informe pretende presentar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones. Lo hemos hecho con pleno conocimiento del hecho de que, según la sabiduría aceptada, la descarbonización requiere el abandono de los combustibles fósiles y "la electrificación de todo". Esto significa que habrá que generar mucha más electricidad en las próximas décadas al mismo tiempo que desarrollamos soluciones para reducir el consumo de energía. Esto plantea la cuestión crucial de cómo se generará esta electricidad adicional.

Actualmente, todas las tecnologías conllevan una serie de problemas. Pero cualquier esfuerzo por anclar la descarbonización de toda la economía en las energías renovables modernas (eólica, solar y biomasa) también se enfrentará a retos técnicos. De hecho, estos retos se están convirtiendo rápidamente en problemas a nivel de sistema que se derivan del hecho de que, como fuentes de energía, la eólica y la solar son variables e intermitentes.

Se ha debatido mucho sobre estas cuestiones, y existe una amplia gama de opiniones en el movimiento sindical internacional sobre las soluciones. Sabemos que algunas de estas cuestiones son controvertidas y dependen de la naturaleza y la madurez de los sistemas a los que se hace referencia, ya que los países en vías de desarrollo se enfrentan a grandes retos, pero al mismo tiempo pueden recurrir al historial de éxitos o fracasos a la hora de tomar decisiones sobre las tecnologías. En este informe, sugerimos que la descarbonización presenta problemas que serán difíciles de resolver a nivel técnico, pero está claro que los mercados privados se han mostrado incapaces de anticipar dichos problemas, y mucho menos de empezar a tratarlos.

El informe explica cómo la propiedad pública de la energía, anclada en un enfoque de bienes públicos, tiene el potencial para que veamos estas diferentes opciones con una mirada objetiva. En nuestra opinión, *todas las* tecnologías deben ser consideradas, ya sean establecidas o prospectivas, de forma coherente con los hechos disponibles. Un enfoque de bienes públicos permite la posibilidad de tomar decisiones en torno a las tecnologías que se basan en una evaluación rigurosa (y continua) de sus méritos sociales, medioambientales y económicos.

El informe concluye con una invitación a los sindicatos de todos los sectores para que colaboren con nosotros en el desarrollo y la coordinación de un *futuro energético público*.

1. Primera parte: El reto climático, la descarbonización y la necesidad de un cambio de política global

Introducción a la primera parte

En esta sección inicial del informe, demostraremos que la transición mundial hacia un futuro con bajas emisiones de carbono *no se está* produciendo. El mundo *no se está* alejando de los combustibles fósiles, ni mucho menos. El consumo de energía está aumentando, lo que hace

que aumenten las emisiones.¹ En el momento de redactar este informe, ya hay claros indicios de que el impacto de COVID 19 sobre el uso de la energía y las emisiones probablemente sea temporal.

Esta realidad expone el fracaso del enfoque neoliberal de "crecimiento verde" para la descarbonización.

El término "crecimiento verde" comenzó a utilizarse a mediados y finales de la década de 2000, y fue adoptado por importantes instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el proceso que rodeó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.² Hoy en día, el término se utiliza menos, pero la idea básica sigue intacta: hacer frente al cambio climático representa una enorme oportunidad económica para las empresas y las economías enteras; el sector privado tiene la capacidad de mostrar liderazgo, puede desencadenar una ola de innovación tecnológica y tiene el capital para financiar una transición hacia un futuro bajo en carbono. Según este punto de vista, el papel de los gobiernos es crear las condiciones en las que el sector privado esté dispuesto a llevar a cabo esta misión histórica.

Adoptado por casi todas las principales economías del mundo, el enfoque neoliberal se construyó en torno a la idea de que el abandono de los combustibles fósiles supondría una enorme oportunidad de negocio durante décadas para los inversores y las empresas privadas.³ Para "desencadenar" esta ola de prosperidad y crear millones de puestos de trabajo ecológicos, los gobiernos simplemente tenían que desarrollar incentivos y desincentivos (lo que los neoliberales llaman "palos y zanahorias") que "enviaran señales" a los inversores privados. Los desincentivos (principalmente, la fijación de precios del carbono, las regulaciones específicas) tienen como objetivo desalentar el uso de la energía basada en el carbono, especialmente para los sectores y las operaciones de uso intensivo de energía de una manera coherente con el principio de "quien contamina paga". Los incentivos adoptarían la forma de subvenciones y otros "apoyos políticos" para fomentar la participación del sector privado.

Teniendo en cuenta el tiempo que llevan persiguiendo las principales instituciones mundiales como el Banco Mundial y el FMI, el "crecimiento verde" supone un enorme fracaso político. Pero los portavoces neoliberales se niegan a reconocerlo, porque hacerlo supondría una derrota ideológica catastrófica. Hace treinta años decían que el sector privado, apoyado por la política gubernamental, lideraría el camino hacia un futuro bajo en

¹ AIE, *World Energy Outlook 2017*, http://www.iea.org/bookshop/750-World_Energy_Outlook_2017
EIA, *International Energy Outlook 2017*, <https://www.eia.gov/outlooks/ieo/>

² Véase, por ejemplo: Grupo del Banco Mundial, *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*, Banco Mundial, 2012, <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=690&menu=35>

³ Informe Stern: *The Economics of Climate Change*, resumen ejecutivo, página 1. En 2006, Lord Nicholas Stern - ex economista jefe del Banco Mundial y uno de los principales defensores del "crecimiento verde" - afirmó que la reducción de las emisiones "debe considerarse una inversión, un coste en el que se incurre ahora y en las próximas décadas para evitar los riesgos de consecuencias muy graves en el futuro. Si estas inversiones se realizan de forma inteligente, los costes serán manejables y habrá un amplio abanico de oportunidades de crecimiento y desarrollo en el camino. Para que esto funcione bien, la política debe promover señales de mercado sólidas, superar los fallos del mercado y tener como núcleo la equidad y la mitigación de riesgos."

carbono. Aportaría capital, innovación, nuevas tecnologías y (por supuesto) crearía "millones de empleos verdes y decentes". Nada de esto ha ocurrido.⁴

El enfoque de "crecimiento verde" de la descarbonización sigue comprometido con el compromiso neoliberal de décadas de privatización, liberalización y difusión de las "asociaciones público-privadas" (P3), que a menudo son muy problemáticas.⁵ Los pensadores neoliberales siguen promoviendo la opinión de que la privatización y la liberalización son *indispensables* para el proyecto de descarbonización: no hay una política climática alternativa. Como parte de este mensaje de "privatizar para descarbonizar", los responsables políticos neoliberales han conseguido cultivar la idea de que los sistemas públicos de energía y los combustibles fósiles "sucios" están intrínsecamente relacionados, mientras que las empresas "verdes" son pioneras en la innovación tecnológica y el espíritu empresarial respetuosos con el clima.⁶

Esto se confirma aún más en aquellos países con sistemas de energía eléctrica aún desarrollados,⁷ y el dominio de un modelo de desarrollo del Norte global. Esto incluye el apoyo a los programas nacionales de electrificación basados en la condicionalidad de la financiación que vincula a los países con los sistemas energéticos liberalizados, como por ejemplo a través del banco mundial, la tecnología y la soberanía de los recursos. Como sindicalistas, esto requiere que los del Norte global amplifiquen la voz y las demandas del Sur global dentro de estos debates más amplios sobre el comercio o la globalización que encierran el colonialismo, pero asegurando que hablamos como una sola voz del movimiento laboral global para un futuro energético público.

2. Segunda parte: Hacia un futuro energético público

Introducción a la segunda parte

En la primera parte identificamos varias formas en las que la ideología y la política neoliberales han impedido la transición energética. Entre ellas:

1. La ingenua confianza en la fijación del precio del carbono como mecanismo para reducir el uso de combustibles fósiles en toda la economía;

⁴ Jean-Claude Juncker, Estrasburgo, 15 de julio de 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=Apxr8hRbOD8>

⁵ En 2007, el principal defensor del "crecimiento verde", Nicholas Stern, saltó a los titulares cuando dijo al mundo que "la ciencia nos dice que las emisiones de GEI son una externalidad; en otras palabras, nuestras emisiones afectan a la vida de los demás. Cuando la gente no paga por las consecuencias de sus acciones, tenemos un fallo de mercado. Este es el mayor fallo de mercado que ha visto el mundo".

Stern, citado aquí: http://neweconomist.blogs.com/new_economist/2006/10/stern_review_2.html

⁶ Jean-Claude Juncker, Estrasburgo, 15 de julio de 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=Apxr8hRbOD8>
"Creo firmemente en el potencial del crecimiento verde. Por eso quiero que la Unión de la Energía de Europa se convierta en el número uno del mundo en energías renovables."

⁷ [Energía - Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas](#)

2. El compromiso inquebrantable de "incentivar" políticas que garanticen que los inversores privados con aversión al riesgo puedan ganar dinero desarrollando "soluciones bajas en carbono". Este enfoque ha conducido a un "déficit de inversión" que está impidiendo aún más la descarbonización de sectores clave;
3. El injustificado énfasis inicial en el "prosumismo" y la "disrupción del mercado" de la generación distribuida;
4. La creación de problemas (evitables) asociados a la "espiral de la muerte" de las empresas eléctricas y la necesidad de "mecanismos de capacidad" (subvenciones para compensar el impacto de las subvenciones al sector de las renovables) para proporcionar energía de reserva,
5. La incapacidad de anticiparse a los graves retos técnicos asociados a las energías renovables variables, retos que aún no se han resuelto en países donde la energía eólica y la solar han alcanzado conjuntamente alrededor del 20% del suministro.

Estos problemas reflejan el grave descuido de la planificación en relación con la transición energética, e ilustran una disposición ideológica miope por parte de la mayoría de los responsables políticos.

En **la segunda parte de** este *informe provisional* mostramos cómo, en términos generales, un *futuro energético público* podría proporcionar una plataforma para la descarbonización del sector eléctrico y, al hacerlo, sentar las bases para la descarbonización de la economía en general.

Para el propio sector energético, nuestro punto de partida es la necesidad de una recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión del uso de la energía. Por lo tanto, un *futuro energético público* debe implicar la toma de propiedad y control públicos de las empresas de servicios públicos "incumbentes" que han sido privatizadas, la "desmercantilización" de las empresas de servicios públicos que siguen siendo entidades públicas o cuasi-públicas, y la desmercantilización de la electricidad, de modo que las empresas de servicios públicos puedan operar libres de los imperativos de los mercados neoliberales en apoyo de un enfoque planificado y basado en los bienes públicos para la transición energética. Los esfuerzos por "perturbar" o socavar las empresas de servicios públicos (como se explica en la primera parte) han resultado contraproducentes, ya que han erigido obstáculos técnicos que sólo pueden resolver las propias empresas de servicios públicos. Este tipo de perturbación es casi siempre regresiva desde el punto de vista social, ya que ha subvencionado a los propietarios, los agricultores y los promotores, al tiempo que ha trasladado los costes a los consumidores. El problema no son las empresas de servicios públicos en sí mismas; el problema son las normas que rigen su comportamiento, normas que han obligado a estas empresas a operar sobre una base comercial y las han hecho menos responsables ante el público, menos transparentes y

menos preocupadas por las necesidades de los consumidores de la clase trabajadora que cuando eran de propiedad pública.

Mientras tanto, en los últimos 10-15 años, las cooperativas y los proyectos de base comunitaria proliferaron en varios países clave, lo que suscitó la esperanza de que una transición energética a escala mundial podría estar anclada en esfuerzos liderados por los ciudadanos de diversos tipos. Pero este optimismo ya no puede mantenerse. Las iniciativas energéticas locales y las cooperativas se han visto gravemente afectadas por la supresión de las subvenciones (principalmente la tarifa de alimentación) y el paso a las subastas de capacidad (a veces denominadas "licitaciones competitivas"). Este cambio ha provocado un fuerte descenso del número de nuevas iniciativas locales (sobre todo en Alemania). Mientras tanto, las cooperativas minoristas también han pasado por momentos difíciles. Los proyectos locales se ven actualmente limitados tanto por el actual marco de mercado como por el papel dominante de los grandes intereses energéticos (incluidas las grandes empresas eólicas y solares) que compiten tanto por el "apoyo político" (subvenciones) como por la "cuota de mercado".

Un sistema de plena propiedad pública tiene el potencial de crear un espacio significativo para la participación a nivel municipal y comunitario. El actual enfoque neoliberal es hostil a la propia noción de compromiso público democrático. En cambio, la propiedad pública ofrece a los defensores de la "ciudadanía energética" la oportunidad de luchar por una participación democrática significativa. Puede integrar los proyectos existentes en una agenda pro-pública más amplia.

Un enfoque global de recuperación también puede aprovechar la experiencia, las habilidades, la profesionalidad y la buena voluntad de millones de trabajadores del sector energético. Las infraestructuras físicas (centrales eléctricas, líneas de transmisión, etc.) fueron en su día propiedad pública, pero con el tiempo grandes partes de la infraestructura de generación y parte de la de transmisión han pasado a ser propiedad privada. Es necesario que estas infraestructuras vuelvan a ser de propiedad pública porque, en un futuro previsible, gran parte de ellas siguen siendo esenciales.

La recuperación integral también puede ayudar a garantizar el acceso universal y equitativo a la electricidad, y puede apoyar un desarrollo socialmente inclusivo y justo basado en políticas industriales estratégicas, en la línea de lo que muchos países desarrollados y en desarrollo han hecho en el pasado (por ejemplo, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Costa Rica y Uruguay).

Sin embargo, la propiedad pública de la energía no proporciona por sí misma todas las soluciones a los formidables retos técnicos, logísticos, sociales y políticos a los que se enfrenta la transición energética. Pero liberar la política de los imperativos del beneficio privado y, al hacerlo, reorientar la atención hacia la resolución de los numerosos retos técnicos que plantea la descarbonización -de forma compatible con las preocupaciones

sociales y ecológicas más amplias- ofrece al menos una oportunidad para salir del atolladero político que existe actualmente. Es una oportunidad que debemos aprovechar con ambas manos.

Este enfoque podría empezar a liberar el potencial de creación de empleo, especialmente en la eficiencia y conservación de la energía. Se analizan los enfoques de financiación que pueden abordar las preocupaciones relativas al coste de la descarbonización (aunque estas preocupaciones no siempre tienen en cuenta los costes de la inestabilidad climática).

El reto consiste en identificar la combinación adecuada de instituciones y políticas públicas que puedan hacer posible estos cambios.

En nuestra opinión, el enfoque de la *vía pública* debe basarse en lo siguiente

1. Es evidente la necesidad de recuperar los servicios eléctricos privatizados para que sean de titularidad pública. Los esfuerzos por "perturbar" o socavar los servicios públicos (como se explica en la primera parte) han resultado contraproducentes, ya que han erigido obstáculos técnicos que sólo pueden ser resueltos por los propios servicios públicos. También han sido a menudo socialmente regresivos.
2. La propiedad pública debe ir acompañada de un claro cambio en el mandato de los servicios públicos. Esto significa que lo que hoy son servicios públicos o cuasi-públicos privatizados, "corporativizados" o "mercantilizados" no sólo deben ser restaurados como asuntos públicos vitales, sino que también se les exigirá que cumplan con una agenda de bienes públicos. Al igual que el proyecto neoliberal de privatización y liberalización se basó en nuevos organismos reguladores (los llamados "operadores de sistemas independientes") para vigilar y hacer cumplir la transición de la electricidad como servicio público hacia la mercantilización, la transición de vuelta a la electricidad pública requerirá instituciones y estructuras de gobernanza que garanticen que los servicios públicos recuperados funcionen de forma transparente y flexible, y que promuevan la cooperación y la participación pública a todos los niveles. Creemos que tanto los trabajadores como los mandos intermedios de las grandes empresas de servicios públicos responderán positivamente a este nuevo mandato porque les ofrece un papel importante en la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
3. La aplicación de un "nuevo mandato" implicará la eliminación progresiva de los llamados mercados eléctricos competitivos, tanto mayoristas como minoristas. Estos mercados ya son disfuncionales, como demuestra la aparición de los "subsidijs para todos", como se explica en la primera parte. Muchos gobiernos (sobre todo en el Sur global) han ignorado las instrucciones del FMI y del Banco Mundial para crear mercados eléctricos "competitivos". Incluso los gobiernos que aceptan la necesidad de involucrar al sector privado a través de "asociaciones público-privadas" entienden que no puede haber un mercado competitivo de la electricidad que sea al mismo tiempo capaz de proporcionar "certezas" a los mismos inversores privados con los que quieran comprometerse.

4. El desmantelamiento de los mercados mayoristas y minoristas presenta oportunidades para "desmercantilizar" la electricidad. Pero el futuro de la energía pública también dependerá de que se abandonen los acuerdos de compra de energía a largo plazo con promotores, inversores y empresas tecnológicas. Las empresas de servicios públicos que recuperen la propiedad pública tendrán que colaborar con empresas privadas, pero esta colaboración puede seguir métodos de contratación probados y fiables; debe ser transparente y no tiene por qué implicar la compra de electricidad como una mercancía. Los acuerdos PPA entre empresas privadas (los llamados "PPA corporativos") no deben ser autorizados a menos que estos acuerdos sirvan al bien público. Como se muestra en la primera parte, estos acuerdos han sido impulsados hasta ahora por las subvenciones y el desplazamiento de los costes que benefician a las empresas privadas a expensas del público.
5. La desmercantilización abre la puerta a un enfoque integrado y planificado de la transición energética. La preocupación por la "cuota de mercado" ya no determinará el comportamiento de las empresas energéticas y, por tanto, podrán evitarse las tensiones entre los "prosumidores" y las empresas de servicios públicos podrán mitigarse y resolverse. En lugar de ofrecer oportunidades para que los individuos y las empresas ganen dinero a expensas del público en general, la eficacia de la generación distribuida puede evaluarse basándose en criterios sociales y ecológicos, y en una clara comprensión de su impacto en todo el sistema de suministro de energía.
6. Una vez recuperadas, hechas totalmente transparentes y operando bajo nuevas formas de gobernanza, las empresas públicas integradas tendrán la libertad de ampliar sus operaciones de manera que puedan ayudar a la descarbonización del transporte, la industria, la alimentación y la agricultura, y otros sectores que actualmente dependen de los combustibles fósiles.

3. Tercera parte: "Electrificar todo" abordando los desafíos técnicos

Introducción a la tercera parte

En la primera parte se señalaron los fallos del enfoque neoliberal en el desarrollo y despliegue de tecnologías clave. Mostramos cómo la fijación de las políticas en atraer la inversión privada y asegurar los beneficios de las empresas privadas, había contribuido a un ingenuo descuido tanto de los desafíos técnicos planteados por la energía renovable variable (ERV) como del "frágil crecimiento" de las tecnologías esenciales que se espera que aborden estos desafíos, como el almacenamiento en baterías.⁸ Las inversiones en otras opciones de reducción de emisiones ("mitigación") consideradas esenciales por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Panel Intergubernamental de Expertos

⁸ <https://www.iea.org/fuels-and-technologies/energy-storage>. Véase también: Informe conjunto de la Agencia Internacional de la Energía y el Centre for Climate Finance & Investment, marzo de 2021, página 7

sobre Cambio Climático (IPCC), como la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y la energía nuclear, también han quedado por debajo de los niveles necesarios.^{9/ 10/ 11}

En la segunda parte de este informe provisional mostramos cómo una *Senda Energética Pública* puede empezar a abordar los problemas del marco neoliberal para la transición energética, siendo los principales la falta de planificación, el "déficit de inversión" y los niveles inadecuados de despliegue, así como los problemas creados por la "guerra energética" y la "espiral de la muerte" de las empresas energéticas tradicionales. Todos estos factores y otros más están impidiendo en la actualidad tanto la descarbonización de los sistemas eléctricos como la de otros sectores de gran consumo energético.

Demostramos que la lucha por la energía pública puede formar parte de un esfuerzo por transformar el sistema multilateral y reforzar un cambio importante hacia un enfoque de "bienes públicos globales" (GPG). El cambio puede anclarse en la financiación pública, y esta financiación puede proporcionar una plataforma de cooperación que abra vías para compartir tecnologías, habilidades y datos sobre una base no lucrativa y no competitiva.

En la tercera parte se tratarán cuestiones relacionadas con las opciones tecnológicas y las opciones de descarbonización. Intentará mostrar cómo la propiedad pública puede cambiar el debate sobre las opciones tecnológicas y el desarrollo. Puede volver a situar la investigación pública y el discurso científico en el centro de la cooperación internacional para las decisiones y elecciones futuras.

Pero hoy existe un intenso debate público sobre qué tecnologías tienen más sentido en la transición energética. Los sindicatos forman hoy parte de estos debates. En contraste con la mentalidad neoliberal y su desmesurada atención a los costes, la competitividad y el "interés del inversor", los sindicatos se preocupan por lo que pueden significar las diferentes tecnologías en términos de su eficacia, su capacidad para generar buenos empleos y sus implicaciones sociales y ecológicas más amplias.

En la tercera parte hacemos lo posible por resumir los debates en torno a las tecnologías clave. Estos debates suelen estar muy polarizados, y han sido configurados por las empresas que tienen interés en convencer a los inversores y a los responsables políticos con respecto a lo esenciales que son sus tecnologías particulares para una "transición energética resistente". Los sindicatos también han expresado su apoyo o su escepticismo respecto a las diferentes opciones energéticas, ya sean las energías renovables, la energía nuclear moderna, la fracturación hidráulica ("fracking"), las tecnologías de gas y otras.

Pero el resumen de los debates que aquí se presenta no debe considerarse como un respaldo a una única opción energética o a una combinación de opciones. En nuestra opinión, todas las tecnologías deberían estar sobre la mesa para su consideración, pero cada una de ellas debería ser sometida a un riguroso interrogatorio. Con ese espíritu, también resumimos las consideraciones relativas al uso de materias primas, como el litio (baterías de almacenamiento estacionario, vehículos eléctricos) y el uranio (energía nuclear).

La necesidad de descarbonizar la generación de electricidad ha creado problemas que los defensores de la privatización y la mercantilización nunca previeron ni se preocuparon por ellos. Transformar completamente el sistema eléctrico en un periodo de tiempo relativamente corto es una tarea sin

⁹ http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index_cancelled.html

¹⁰ <http://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/commentary-we-cant-let-kemper-slow-the-progress-of-carbon-capture-and-storage.html>

¹¹ http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index_cancelled.html

precedentes, que requiere una planificación, una inversión y una coordinación considerables, cosas que el sector privado no hace bien.

Gran parte del debate sobre la viabilidad de la descarbonización de los sistemas eléctricos no se refiere realmente a las limitaciones técnicas o de recursos para desplegar determinadas tecnologías. Al fin y al cabo, las tecnologías existen hoy en día para lograr la descarbonización total de la generación de energía en la mayoría de los países del mundo. Aunque se pueden hacer y se harán mejoras tecnológicas, las tecnologías existen para lograr la descarbonización a la escala y -cuasi-velocidad requeridas para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Aunque las tecnologías existen, no es menos cierto que se trata de un proceso complejo, y precisamente por eso es necesaria la planificación. Pero explorar los aspectos técnicos de la descarbonización del sistema eléctrico ayuda a comprender la planificación y la inversión necesarias y la importancia de la propiedad.

En este capítulo, abordaremos esta cuestión con los medios de producción cuya viabilidad industrial está ahora probada, dados los requisitos inmediatos para descarbonizar toda la economía.

4. Cuarta parte: La promesa de un futuro energético público

[TBD]

Anexo 1: Apoyo sindical a un futuro energético público

Un número creciente de sindicatos de todo el mundo apoya la propiedad pública de la energía y otros servicios vitales. Este apoyo se expresa cada vez más en términos de un enfoque de "bienes públicos" para la protección del clima y la satisfacción de las necesidades sociales, un enfoque que se basa en la defensa y la ampliación de la propiedad pública de la energía, el transporte, las finanzas y otros sectores clave. En muchos contextos nacionales y regionales, también suele estar vinculado a las luchas contra la privatización. Las declaraciones y acciones sindicales alineadas con esta amplia visión pro-pública son cada vez más explícitas y más visibles de lo que solían ser hace unos años. La concienciación y el compromiso están aumentando.

Este creciente apoyo a la propiedad pública de la energía sugiere un importante potencial para una campaña sindical colectiva y global que defienda la energía pública allí donde esté amenazada, y que recupere la propiedad y el control de los servicios energéticos allí donde hayan sido privatizados. Una campaña de este tipo no sólo podría hacer avanzar la lucha por la protección del clima y la transición hacia futuros sistemas energéticos sostenibles, sino que también podría reforzar la solidaridad sindical internacional, ayudar a abordar la desigualdad y la exclusión social, y mejorar las perspectivas de los trabajadores en la transición energética.

Durante muchos años, los sindicatos del Sur global han estado a la cabeza de los esfuerzos por defender la propiedad pública de la energía. En Tailandia, el sindicato de la energía LU-

EGAT se enfrentó con éxito a una iniciativa de privatización del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo en 2005, preservando la empresa pública de energía del país. En Brasil, los sindicatos que trabajan en el marco de la **Plataforma Laboral y Campesina de la Energía** desempeñaron un papel clave en la promoción de un programa pro-público bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores del **Presidente Luiz Inácio Lula da Silva** (de 2003 a 2010), que incluía la consolidación de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos estratégicos, la oposición a la comercialización de la electricidad y el petróleo, y una distribución más equitativa de los ingresos de los recursos nacionales a través de programas sociales.

En Sudáfrica, el mayor sindicato del país, el **Sindicato Nacional de Trabajadores del Metal de Sudáfrica** (NUMSA), contribuyó a dar forma a la narrativa emergente en 2012 en torno a la necesidad de la propiedad social de las energías renovables y la necesidad de "reclamar" la empresa nacional de servicios públicos (Eskom) para servir a una misión pública. Más recientemente, la **Federación Sudafricana de Sindicatos** (SAFTU) también ha pedido la "propiedad social" de las energías renovables.

Los sindicatos de toda América Latina ayudaron a garantizar que la *Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)*, publicada por primera vez en 2012 y actualizada en 2016, contuviera fuertes compromisos a favor de los ciudadanos.

A nivel mundial, la **Internacional de Servicios Públicos (ISP)** ha asumido el liderazgo de la resistencia mundial a la privatización, organizando la defensa mundial, desarrollando redes de sindicatos, ONG y académicos, y apoyando las campañas sindicales contra la privatización de la energía, el agua y la salud. La ISP es un actor fundamental en la labor de remunicipalización mundial, en la que se están revirtiendo las privatizaciones. La ISP también fue pionera, con éxito, en el concepto alternativo de "asociaciones público-públicas", en el que los servicios públicos se apoyan mutuamente de forma cooperativa, fuera de la lógica de la búsqueda de beneficios. Todas estas herramientas deben aplicarse para hacer frente a la crisis climática. En su declaración para la COP25 de Madrid, la ISP reforzó una posición favorable a lo público, afirmando que "en el sector energético, debemos poner fin a la propiedad privada de nuestras infraestructuras y recursos. Si queremos dejar de quemar combustibles fósiles, los gobiernos deben invertir masivamente, para toda la gente, no sólo para los que pueden pagar".

En Europa, el organismo regional de la ISP, la **Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos** (FSESP), ha acogido con satisfacción la "ambición histórica" de la propuesta de Ley del Clima de la Comisión Europea -que pretende plasmar en la ley los objetivos del "Pacto Verde Europeo"-, al tiempo que [ha criticado duramente](#) el actual enfoque de la protección del clima basado en el beneficio. En palabras de la FSESP, "la privatización y la maximización de los beneficios no van de la mano de la adaptación al clima, y las soluciones basadas en el mercado (como el mecanismo ETS), no son suficientes para hacer frente al impacto combinado de la emergencia climática, que es ecológico, político, social y económico". La FSESP ha pedido, en cambio, que el Pacto Verde Europeo incluya (a) un aumento significativo de la inversión pública; (b) la promoción de la propiedad pública de los servicios públicos ; (c) una ambiciosa estrategia de Transición Justa para los trabajadores y las

comunidades locales (que incluya no sólo aspiraciones sino una "planificación política detallada"); y, (d) un compromiso para tratar el acceso a la energía (y al agua) como un derecho.

Un informe de la **Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos** (PSIRU), encargado por la FSESP y titulado [Going Public: Un sistema energético descarbonizado, asequible y democrático para Europa](#), planteaba un argumento contundente para rechazar el actual modelo energético centrado en el beneficio. El informe también argumentaba que la UE no cumplirá sus compromisos de París si persiste en el actual modelo de liberalización y privatización de la energía.

En Francia, la **FNME-CGT** -la división de energía y minería de la principal confederación nacional del país-, junto con las demás federaciones sindicales francesas del sector de la energía, ha liderado a los trabajadores de la electricidad y el gas en una importante huelga que comenzó a finales de 2020, en defensa del sistema energético público del país. Las huelgas se oponen a las propuestas presentadas por el gobierno francés que "reestructurarían" el sector energético del país, lo que, según la FNME-CGT, comprometería la capacidad de la empresa nacional de electricidad EDF para funcionar como una empresa pública integrada, pondría en peligro la seguridad energética y los puestos de trabajo, y socavaría el interés público general. En palabras de la FNME-CGT, "la independencia energética, la seguridad y la responsabilidad social en el suministro, pero también la lucha contra la exclusión y la lucha contra el calentamiento global, deben ser prioridades para la nación, llevadas por la empresa de energía. La planificación de la lucha contra el calentamiento global tendrá que ser llevada a cabo por la empresa pública de energía, con la vista puesta en el impacto global del carbono."

En la comunidad autónoma española de Galiza, la Confederación Intersindical Galega ("CIG") ha reclamado la creación de una empresa eléctrica pública que gestione las centrales hidroeléctricas de la región, entre varias reivindicaciones relacionadas con el [llamamiento del sindicato](#) a una "Transición Energética Justa" regional.

En el Reino Unido, el **Trades Union Congress**, en su sesión de 2019 en Brighton, adoptó por unanimidad [una resolución](#) que pedía "la plena recuperación del sector eléctrico para que sea de propiedad pública, abarcando la capacidad de generación existente y futura, la transmisión y las redes de distribución, así como las operaciones de venta al por menor y de servicio al cliente."

También en el Reino Unido, una publicación de 2018 emitida por el **Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales** (PCS) defendió una transición justa para los trabajadores a través de un marco de democracia energética -propiedad pública y control democrático de la energía- desde la perspectiva de un sindicato de funcionarios. Defiende la creación de un Servicio Climático Nacional, tal y como se defiende en la [Campaña Un Millón de Empleos Climáticos, ya](#) que ofrece la oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se replantean y reconstruyen nuestros servicios públicos para las personas y no para los beneficios. Fue adoptado formalmente por la conferencia del PCS en mayo de 2017. A finales de 2020, el PCS también publicó un folleto titulado, *Aviation Democracy*, en el que se exponen "los argumentos a favor de la propiedad pública del sector de la aviación para

proteger los puestos de trabajo y proteger el planeta." El folleto muestra que la aviación del Reino Unido se ha desarrollado gracias al apoyo masivo del Estado, y que la privatización, la externalización y la desregulación no han conseguido los resultados prometidos. Dado que la financiación pública sigue siendo parte integrante del sector, "debe hacerse en nombre de lo público, no de los beneficios privados".

El sindicato británico **Unite the Union** está firmemente comprometido con la propiedad pública de la energía. Su división de Química, Farmacia, Procesos y Textiles (CPPT) ha elaborado un folleto en el que reclama "una transición obrera" para el sector CPPT, impulsada por "la inversión y la propiedad públicas", una comisión de transición en la que esté representada la voz de los trabajadores, un "departamento gubernamental dedicado y totalmente financiado que se centre exclusivamente en una economía verde y una transición justa", etc. Las reivindicaciones del sindicato se centran en el desarrollo del hidrógeno verde como clave para la descarbonización del sector del CPPT, y argumenta que la propiedad y la inversión públicas agresivas son cruciales para que esto tenga éxito.

También en 2019, el sindicato de servicios públicos del Reino Unido **UNISON** publicó un folleto titulado *Power to the People (El poder para el pueblo)*, en el que [pide la nacionalización de las "seis grandes" empresas energéticas y la creación de un "ejército verde" que ayude a impulsar una transición que podría permitir al Reino Unido alcanzar las emisiones "netas cero" en 2050](#). Aunque las recientes conversaciones sobre la energía se han centrado en la recuperación de la propiedad pública de la transmisión y la distribución (T&D), UNISON sostiene que también hay argumentos convincentes para la propiedad pública total, incluidos los segmentos de suministro minorista y de clientes del sistema energético.

En Escocia, el **Congreso de Sindicatos Escoceses** (STUC) ha [pedido la](#) propiedad pública de la energía. El STUC señala que el éxito de la transición energética requerirá grandes inversiones y mejoras de las infraestructuras en los próximos años, y que el sector privado no está aportando los niveles de financiación necesarios; en cambio, la inversión en energías limpias se ha desplomado desde 2015. El Gobierno escocés ha propuesto la creación de una empresa energética de propiedad pública, pero esto, argumenta el STUC, "no cambiará la combinación de regeneración y es probable que fracase, dados los pequeños márgenes de beneficio en el comercio minorista". En su lugar, el STUC afirma: "La intervención gubernamental sensata en el suministro de energía, sería que el Gobierno del Reino Unido llevara todo el sector del suministro a la propiedad pública."

En Canadá, el **Sindicato Canadiense de Empleados Públicos** (CUPE) ha estado a la cabeza de las reivindicaciones de la propiedad pública de los servicios públicos -incluida la energía eléctrica- desde la década de 1960, ganando muchas campañas que revirtieron o detuvieron la privatización. Las campañas actuales se centran en detener el desmantelamiento y la privatización de los activos eléctricos públicos a nivel provincial y municipal, así como en poner la energía eólica y solar bajo control público. El gran porcentaje de activos eléctricos hidroeléctricos y nucleares de propiedad pública constituye un gran objetivo para los intereses financieros y los gobiernos que buscan soluciones rápidas a los déficits presupuestarios a corto plazo, pero la oposición pública contra la privatización sigue siendo relativamente alta. La CUPE sigue vinculando la propiedad pública, la electrificación del

transporte público y privado, y una transición justa de los trabajadores de las industrias intensivas en carbono, en pos de la inversión en la ampliación de los servicios públicos.

En Corea, el **Sindicato de Trabajadores del Servicio Público y el Transporte de Corea (KPTU)** adoptó "la expansión y el fortalecimiento de la energía y el transporte públicos" como programa para una transición justa en la asamblea anual del KPTU de 2021. El KPTU está organizando una huelga-lucha general en noviembre para avanzar en esta agenda junto con otras prioridades centrales del KPTU, incluyendo la "propiedad pública democrática" y una "garantía estatal de empleos climáticos". Las principales demandas para una transición justa son (a) integrar seis corporaciones públicas de energía (5 fósiles y 1 nuclear), que sólo inducen a la competencia, en 1 corporación pública, y renacionalizar las centrales eléctricas privatizadas en el proceso de integración; (b) reforzar y ampliar los proyectos de energía renovable para lograr la emisión cero a través de la "ecologización" de la corporación pública de energía integrada; (c) garantizar la participación sustantiva de los sindicatos y las comunidades locales a través de la "democratización" de la corporación. El KPTU exige además una "garantía de empleo estatal" para los trabajadores de la industria energética en el proceso de transición. Esta demanda tiene tres principios: (a) puestos de trabajo para los trabajadores que puedan o vayan a perder su empleo en el proceso de descarbonización; (b) crear puestos de trabajo en el sector estatal o público; y (c) garantizar salarios adecuados y condiciones de trabajo decentes.

En México, tanto el **Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)** como la **Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros (UNTyPP)** apoyan los esfuerzos actuales del gobierno del **presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)** para revertir las reformas de privatización llevadas a cabo por la administración anterior, y reafirmar la soberanía energética del país. El conflicto se ha convertido en un momento potencialmente crucial para la política energética en México -la segunda economía más grande de América Latina- y podría tener implicaciones globales en la lucha por los enfoques "pro-públicos" de la transición energética.

En el sector del transporte, la **Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)** comenzó a desarrollar su enfoque de protección del clima en toda la economía en su Congreso Mundial de 2010 en Ciudad de México, publicando un folleto sobre los [*trabajadores del transporte y el cambio climático: Hacia una movilidad sostenible con bajas emisiones de carbono*](#), que incluía un fuerte compromiso con la ampliación de la propiedad pública en el sector energético. En 2019, la ITF lanzó su nueva campaña [*Nuestro Transporte Público*](#), que consiste en 28 demandas políticas en seis áreas clave -incluyendo, de manera crucial, la propiedad pública y la financiación pública. Como parte de este amplio esfuerzo, la ITF ha intentado iniciar un debate sobre cómo las tecnologías de plataformas basadas en la web podrían incorporarse a los sistemas modernos de transporte público, de manera que se extienda la propiedad pública sobre los viajes compartidos y servicios similares, manteniendo al mismo tiempo un claro compromiso con los sistemas de transporte público modernos convencionales.

Los sindicatos más allá de los sectores de la energía y el transporte también ven cada vez más la necesidad de adoptar una visión pro-pública de la energía para proteger el planeta y a sus miembros. En 2019, **Global Nurses United** -un proyecto encabezado por la organización

estadounidense **National Nurses United** (NNU)- publicó un informe titulado [*Nurses' Unions, Climate Change and Health \(Sindicatos de enfermeras, cambio climático y salud\)*](#). El informe ofrece una visión general de los impactos conocidos y previstos del cambio climático relacionados con la salud, partiendo del reconocimiento de que la energía y la protección del clima son cuestiones que afectan a todos los trabajadores, y que los sindicatos de todos los sectores pueden y deben considerarse parte de la lucha por el control de la energía. Tal y como se afirma en el informe, "las enfermeras entienden que una lucha exitosa por el control de la energía es crucial, por lo que los sindicatos de enfermeras abogan por la "democracia energética" a todos los niveles..... Las enfermeras consideran que la reducción de las emisiones y las medidas de adaptación eficaces son "bienes públicos" y no una frontera para la especulación y el lucro. Las enfermeras seguirán presionando para que se adopte un enfoque de bienes públicos anclado en unos servicios públicos adecuadamente financiados."

Más allá del movimiento sindical, los argumentos a favor de la titularidad pública se ven reforzados por un conjunto creciente de investigaciones afiliadas o aliadas a los sindicatos, llevadas a cabo por aliados como **el Transnational Institute** (TNI), la **Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos** (PSIRU), el **Proyecto de Servicios Municipales**, el **Centro de Información y Desarrollo Alternativo** (AIDC), **Food and Water Watch**, la **Democracy Collaborative** y otros.

La aparición del marco del "Nuevo Pacto Verde" y el aumento del apoyo a un enfoque de "bienes públicos globales" en la política ha comenzado a dar forma al discurso a nivel de la ONU. En concreto, al presentar sus [*Principios de Ginebra para un Nuevo Acuerdo Verde Global*](#), la **Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo** (UNCTAD) ha ofrecido un conjunto de "Principios para un Nuevo Multilateralismo", que incluye el reconocimiento de que los Estados miembros de la ONU "comparten responsabilidades comunes pero diferenciadas en un sistema multilateral construido para promover los bienes públicos globales y proteger los bienes comunes globales".